



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, marzo doce (12) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:	SOLICITUD ACLARACIÓN Y ADICIÓN SENTENCIA
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL – PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JUAN FERNANDO TAMAYO
DEMANDADO:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
RADICADO:	05001– 31 – 05 – <u>013-2013-01216-01</u>
ACTA N°	16

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede a resolver la solicitud de aclaración y/o adición de sentencia proferida por la Sala el 3 de marzo de 2020. A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 16** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

1. El DEMANDANTE pretendió en este proceso que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el **23 de enero de 1995** hasta el **16 de diciembre de 2010** y que fue despedido sin justa causa; y que, como consecuencia de lo anterior, se condenara a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA al pago de sendos conceptos laborales derivados de la relación.
2. El Juzgado Trece 13 Laboral del Circuito de Medellín concluyó que las partes estuvieron unidas por varios contratos de trabajo en el lapso 23 de enero de 1995 al 16 de diciembre de 2010, y luego de declarar probadas las excepciones de prescripción y buena fe, condenó a varios de los conceptos deprecados en la demanda.
3. En virtud de los recursos interpuesto por las partes, esta Sala de Decisión en providencia del 3 de marzo de 2020 concluyó que resultaba procedente confirmar la decisión de declarar la existencia de contrato de trabajo entre las partes, así: **Desde el 17 de octubre de 2008** hasta el **19 de diciembre de 2008** y **Desde el 19 de febrero de 2009** hasta el **16 de diciembre de 2010**

La decisión se sustentó, en que, si bien los trabajadores vinculados con la U de A tienen la calidad de **empleados públicos**, de acuerdo con el **artículo 1 de la Ley 1161 de 2007**, la sentencia **T – 813 de 2008** y los documentos obrantes a **folios 97 a 99 y 299 a 301**, el **17 de octubre de 2008** el actor como miembro de la Banda Sinfónica manifestó a la U de A el interés de ser nombrado como trabajador oficial.

Como consecuencia de lo anterior, para la liquidación de los créditos laborales, se tomaron los extremos temporales en los que el señor JUAN FERNANDO TAMAYO fue trabajador oficial (**Desde el 17 de octubre de 2008 hasta el 19 de diciembre de 2008 y Desde el 19 de febrero de 2009 hasta el 16 de diciembre de 2010**), se condenó a pagar la indexación sólo en relación con las sumas a pagar por concepto de vacaciones, prima de vacaciones e indemnización por despido injusto; se revocó la decisión de declarar probada la excepción de buena fe de la U DE A y se adicionó la sentencia, condenando al pago de la sanción moratoria consagrada en el **Decreto 797 de 1949** desde el **17 de marzo de 2010** hasta el pago efectivo de las prestaciones sociales.

Y se consideró en la parte motiva que lo procedente era revocar la declaración de contrato de trabajo en relación al período **23 de enero de 1995 al 16 de octubre de 2008**, porque en ese lapso el actor ostentó la calidad de empleado público, considerando que lo procedente era proferir una **decisión absolutoria**, invocando para ello la sentencia **SL9315 de 2016** de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

4. El apoderado del demandante solicita que la sentencia “sea adicionada o aclarada en el sentido que los contratos de prestación de servicios no tenidos en cuenta por esta jurisdicción sean judicializados por la jurisdicción contencioso administrativa, por lo tanto, se ordene copias auténticas y se remitan a los jueces administrativos para su conocimiento”
5. La Sala no accederá a la solicitud efectuada por el memorialista, por lo siguiente:

En primer lugar, porque de acuerdo con lo previsto en el **artículo 285 del Código General del Proceso**, si bien la sentencia puede ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga **conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda**, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella, sin embargo se advierte que la providencia es clara al señalar en la parte

motiva las razones para absolver con relación al vínculo que existió entre las partes en el periodo **23 de enero de 1995 al 16 de octubre de 2008**, porque en ese lapso el actor no acreditó la calidad de trabajador oficial.

En segundo término, la sentencia no omitió resolver extremo alguno de la *Litis*, ni existe otro punto que debiera ser objeto de pronunciamiento de conformidad con la Ley, en los términos del **artículo 287** del Código General del Proceso, porque de acuerdo con lo previsto en el **numeral del 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001**, la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Por esta razón, por el período en el que no se acredita la calidad de trabajador oficial (23 de enero de 1995 – 16 de octubre de 2008), la decisión a adoptar no es otra distinta que la de absolver al respecto.

Sobre el particular, se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente reiterado, pudiendo resaltar sentencias como la **CSJ SL 18 mar. 2003, rad. 20173, SL10610-2014, SL9315-2016, SL10610-2014, SL21087-2017, CSJ SL603-2017, SL 3096 de 2018, SL 392 de 2018, SL 184 de 2019 y SL 2226 de 2020**. En la **SL 1793 de 2018**, la Alta Corporación indicó:

“Siguiendo ese derrotero, ya puede advertirse que el tribunal no cometió los desatinos jurídicos que le atribuye el recurrente, pues lo que hizo fue, precisamente, **ante la inexistencia del contrato de trabajo alegado por la actora, absolver al municipio demandado de las pretensiones formuladas en su contra**, que estaban soportadas sobre la existencia del contrato de trabajo.

De otro lado, no es cierto que cuando el juzgador considera que lo que ligó a las partes en litigio fue otra modalidad de vinculación distinta de la del contrato de trabajo, debe proponer necesariamente un conflicto de jurisdicción. Bien puede hacerlo, e incluso, lo ideal sería que desde el momento mismo en que examina la demanda inicial lo declare, si de acuerdo con las pruebas aportadas con esa pieza procesal y/o los distintos criterios de clasificación de los servidores públicos que dispone la ley, puede vislumbrar que la parte demandante no podía estar vinculada mediante contrato de trabajo. **Empero, si admite la demanda y el proceso se tramita normalmente, lo que debe hacer es, como ya se dijo, verificar si hubo o no el contrato de trabajo para que proceda de acuerdo con lo que concluya en uno u otro sentido, es decir, condenar o absolver**”. (negrilla intencional de la Sala)

En efecto, en la providencia proferida por esta Sala de Decisión se invocó la sentencia **SL9315-2016**, que al respecto indica:

“Teniendo en consideración que el actor pretende con su demanda que el juez laboral declare la existencia de un contrato de trabajo, ello le permite a la jurisdicción ordinaria avocar el conocimiento para determinar si aquel tuvo la calidad de trabajador oficial, y a partir de allí, declarar los derechos impetrados

RADICADO 05001– 31 – 05 – 013-2013- 01216-01

en el escrito inaugural del proceso que se hallen debidamente acreditados.
Ahora de no probarse la calidad de trabajador oficial, el juez debe absolver al respecto". (Negrillas fuera de texto)

Siendo, así las cosas, como en la demanda se pretendió la declaración de contrato de trabajo entre las partes, al encontrarse acreditado el vínculo en relación con unos períodos, sobre ellos se profirió decisión condenatoria accediendo a las pretensiones; pero frente a aquel en el que no se demostró la calidad de trabajador oficial, la decisión acorde a la Ley y al precedente antes referido, fue la de absolver.

6. Ahora, lo que sí observa la Sala en esta oportunidad, es que si bien en la parte motiva de la sentencia se expresó que en relación al periodo **23 de enero de 1995 al 16 de octubre de 2008** se revocaría la declaración de contrato de trabajo, de manera que lo procedente era proferir una **decisión absolutoria**; sin embargo, en la parte resolutive tal determinación no quedó plasmada, por lo que, de manera oficiosa se efectuará la complementación en tal sentido.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECIDE:

PRIMERO: Denegar la solicitud de adición y aclaración de la sentencia elevada por la parte demandante.

SEGUNDO: De oficio, se procede a adicionar la parte RESOLUTIVA de la sentencia proferida el pasado tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020), así:

Se ABSUELVE a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA de todas las pretensiones incoadas por el señor **JUAN FERNANDO TAMAYO** en relación con el periodo **23 de enero de 1995 al 16 de octubre de 2008**.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma en constancia por quiénes en ella intervinieron.

RADICADO 05001- 31 - 05 - 013-2013- 01216-01

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 45 del 15 de marzo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>